

# *Democracia y ocupación militar en Oriente Medio*

*Gema Martín Muñoz*  
Universidad Autónoma de Madrid

*Resumen:* El artículo analiza los factores internos, regionales e internacionales de la nueva configuración de Oriente Medio desde la guerra del Golfo, así como la relación contradictoria entre democracia y ocupación militar que caracteriza la experiencia de los procesos políticos de Afganistán e Iraq.

*Palabras clave:* Iraq, Afganistán, Estados Unidos.

*Abstract:* The article analyzes the internal, regional and international factors of the new configuration of Middle East since the war of the Gulf, as well as the contradictory relation between democracy and military occupation that characterizes the experience of the political processes in Afghanistan and Iraq.

*Key words:* Iraq, Afghanistan, United States.

Tras un proceso histórico acumulativo de injerencias externas y gobiernos autoritarios, la región de Oriente Medio padece actualmente las consecuencias de una triple opresión: la de los regímenes árabes patrimonialistas y clientelistas que se perpetúan en el poder a través de una práctica política depredadora de sus sociedades, la de la ocupación israelí de los territorios palestinos y la de Estados Unidos como fuerza ocupante en Iraq y Afganistán.

La guerra del Golfo de 1991 fue el escenario a partir del cual la superpotencia victoriosa comenzaba a establecer las nuevas reglas del orden monopolar y que, en el caso de Oriente Medio, se iba a tradu-

cir en la voluntad firme de refundar esta región tratando de convertirla en un protectorado político-militar estadounidense al servicio de los intereses estratégicos de Israel<sup>1</sup>.

El espacio regional árabe va a experimentar desde entonces un proceso de descomposición y fragmentación que le hará desaparecer definitivamente como conjunto con capacidad para defender sus intereses y controlar el devenir de su elevado valor geopolítico y económico. La alquimia que ha permitido que se instaure ese «desorden árabe» es fruto de la perniciosa imbricación que se ha establecido entre la política interior y exterior en esta región.

Desde los años ochenta se va a llevar a cabo un proceso de alienación creciente entre los gobiernos árabes y sus sociedades que se va a agudizar con la experiencia de la guerra del Golfo, durante la cual se resquebrajaron los sistemas de alianza interárabes, se manifestaron sin disimulo los antagonismos locales, salieron a la luz las enormes disfunciones de los regímenes, se desvelaron las «inconfesables» dependencias con Estados Unidos e incluso se alinearon con Israel en contra de un país árabe. Todos los riquísimos Estados petroleros del Golfo y Arabia Saudí demostraron a sus ciudadanos que ante su incapacidad para defenderse a sí mismos en una región desahuciada por la inestabilidad optaban definitivamente por el protectorado militar norteamericano<sup>2</sup>.

La incapacidad de los Estados árabes para influir a favor de los derechos palestinos e iraquíes, percibidos como dos ilustraciones de una actitud discriminatoria de la «comunidad internacional» (pasiva ante una tragedia que dura más de medio siglo, pero presta a movilizarse para defender a una monarquía petrolera dictatorial y castigar al pueblo iraquí en pro de luchar contra otro dictador), ha tenido unos efectos devastadores para la legitimidad de esos gobernantes.

Carentes de fuentes de legitimación para permanecer en el poder, las élites gobernantes van a optar por la protección de la superpotencia para garantizarse la continuidad del régimen. Washington pasaba a garantizar a las élites gubernamentales árabes su supervivencia autoritaria en el poder siempre y cuando asumiesen el nuevo proyecto estratégico estadounidense (acuerdos y bases militares, aceptar la

---

<sup>1</sup> Muy interesante es el análisis a este respecto de MEARSHEIMER, J. J., y WALT, S. M.: «The Israeli Lobby and U.S. Foreign Policy», *London Review of Books*, vol. 28, 6 (2006).

<sup>2</sup> MARTÍN MUÑOZ, G.: *Iraq, un fracaso de Occidente*, Barcelona, Tusquets, 2003, pp. 134 y ss.

situación de ostracismo y embargo en que quedaba sometido Iraq y apoyar las negociaciones de paz palestino-israelíes de acuerdo con las reglas del juego establecidas por la superpotencia). Quienes no se integraban en esa dinámica eran definidos como «*rogue States*» (Estados bastardos)<sup>3</sup>.

La irrupción de los atentados del 11 de septiembre de 2001 va a fortalecer el autoritarismo de los Estados árabes al revalorizarse como baza estratégica para la política de «guerra contra el terrorismo» que la administración Bush inauguraba. Lejos de aunar promoción de la democracia y Estado de derecho con la lucha contra el terrorismo, ha fortalecido las legislaciones abusivas y arbitrarias que, a cambio de plegarse a todos los criterios de Washington sobre el terrorismo y los medios a veces ilegales para combatirlo, son también utilizadas como instrumento de represión política y cortapisa a las libertades civiles e individuales.

La alteración de las relaciones internacionales que ha engendrado la política de «guerra contra el terrorismo» ha resultado muy provechosa para el autocratismo de los gobernantes en esta región. Las leyes antiterroristas en esos países establecen una definición demasiado ambigua y amplia de los crímenes de terrorismo, niegan el derecho a la libertad de opinión y expresión así como la oposición pacífica democrática bajo el pretexto del terrorismo y amenazan los derechos de los ciudadanos a la libertad y la seguridad personal, anulando muchas garantías judiciales. Todos estos países han ido presentando sus legislaciones al Consejo de Seguridad de la ONU en virtud de la resolución 1373 que, adoptada el 28 de septiembre de 2001, constituyó un Comité antiterrorista y pidió a todos los Estados miembros que presentasen un informe sobre las medidas en vigor o las que podrían ser establecidas para luchar contra el terrorismo. La aceptación internacional de dichas jurisdicciones abusivas ha funcionado como mecanismo de legitimación de unas leyes que hasta ahora nunca se habían considerado aceptables en el marco del Estado de derecho.

En consecuencia, se da una connivencia de mutuo interés entre Washington y los clanes que dominan los sistemas políticos regionales. La clientelización de esos Estados de Oriente Medio es un factor sustancial para el ejercicio de control que Estados Unidos ha estable-

---

<sup>3</sup> A esta definición en lenguaje laico de la administración Clinton, le seguirá la del « *eje del mal*» del presidente Bush, de evidente connotación religiosa.

cido en la región, a la vez que es el instrumento a través del cual los regímenes se imponen en el poder gracias a los niveles de impunidad que la comunidad internacional, de la mano de Washington, les concede para dominar a sus sociedades a través del uso de la represión y la violación de los derechos humanos.

Las facilidades de actuación que Estados Unidos va a encontrar en esta región, unido al acceso al gobierno estadounidense del pensamiento neoconservador, partidario de las acciones militares, y la aparición del terrorismo de factura Al Qaeda con los atentados del 11 de septiembre de 2001, van a apuntalar la intervención estadounidense a favor de su búsqueda por transformar radicalmente la región de Oriente Medio. Todo ello se ha traducido en la ocupación militar de Afganistán en noviembre de 2001 y en la de Iraq en marzo de 2003, así como en el apoyo incondicional a la derecha israelí y a todos los regímenes árabes solicitados y solícitos para contribuir en la «guerra contra el terrorismo».

No obstante, cabría recordar que tanto en el caso de Afganistán como de Iraq, Estados Unidos fue a derrocar los respectivos regímenes totalitarios que él mismo contribuyó intensamente a crear. En el caso afgano, tanto Osama bin Laden como el régimen talibán fueron resultado de la alquimia de la política norteamericana durante la Guerra Fría, periodo en el que Estados Unidos jugó activamente la baza del integrismo islámico en la región<sup>4</sup>. Con respecto a Saddam Husein, éste fue el «defensor de la libertad» que el mundo occidental eligió para luchar contra el régimen de Jomeini a través de una cruenta guerra que el líder iraquí provocó a principios de los años ochenta, gracias a la cual gozó de impunidad para reprimir con brutalidad a la sociedad iraquí y adquirir todo tipo de armas, convencionales y químicas, para gran beneficio de las industrias armamentísticas europeas y norteamericanas. Sin embargo, cuando se invadió Iraq el 20 de marzo de 2003 era cuando ya no existían tales armas, tras doce años de embargo radical y de inspecciones de la ONU que pusieron fin a dicho armamento<sup>5</sup>.

Al igual que los europeos hicieron en el desarrollo de su empresa colonial, Estados Unidos va a buscar también la justificación ética y

---

<sup>4</sup> MARTÍN MUÑOZ, G.: «El conflicto entre Occidente y el Islamismo», *Claves de Razón Práctica* (2001).

<sup>5</sup> SEGURA, A.: *Irak en la encrucijada*, Barcelona, RBA, 2003, y MARTÍN MUÑOZ, G.: *Iraq...*, *op. cit.*

moral de su neo-colonialismo presentándolo como un ejercicio benevolente de la «civilización» contra la «barbarie». Los bombardeos y la invasión militar se convertirán en un ejercicio de liberación de los pueblos y el objetivo final será «llevar la democracia» a esos países retrasados e inferiores. Así renacía la extraña combinación binaria entre democracia y ocupación militar extranjera que ha dominado el discurso y el devenir político de los últimos años.

Sin embargo, ambas invasiones, utilizando el pretexto del terrorismo y la democracia como justificación, han generado un mayor descrédito en todas las poblaciones árabes y musulmanas hacia la política de Estados Unidos, derivándose de ello un distanciamiento creciente con respecto a su lucha contra el terrorismo. Es muy interesante tener en cuenta los resultados de las encuestas de opinión realizadas en los países de Oriente Medio en relación con la credibilidad que esas poblaciones conceden a la lucha contra el terrorismo y a la política internacional en general. Las encuestas realizadas por *The Pew Research Center for the People and the Press* en siete países árabes y Turquía muestran que desde 2002 en adelante la lucha contra el terrorismo liderada por Washington ha perdido de manera radical crédito en estos países: menos de un cuarto de los encuestados la apoya hoy día. Particularmente preocupante es también el creciente descrédito que experimenta la Organización de Naciones Unidas entre estos ciudadanos. Probablemente este sentimiento no sea ajeno a la progresiva desilusión experimentada por estas poblaciones al ver la incapacidad de dicha organización para imponer a Israel el cumplimiento de sus resoluciones; al hecho de recordar que el embargo que sometió a la sociedad iraquí durante doce años a una catástrofe humanitaria fue impuesto por la ONU<sup>6</sup>; y al hecho de que en la actualidad se da una ambigua situación entre la ONU y la ocupación estadounidense de Iraq a raíz de la resolución 1511<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> ARNOVE, A. (ed): *Iraq under Siege. The Deadly Impact of Sanctions and War*, Cambridge, South End Press, 2000.

<sup>7</sup> La resolución 1511 de Naciones Unidas, promovida por Estados Unidos y aprobada por el Consejo de Seguridad el 16 de octubre de 2003, daba una ambigua pátina internacional a la ocupación de Iraq al reconocer al Consejo de Gobierno Iraquí nombrado por el representante del Gobierno Provisional de la Coalición, Paul Bremer, calificándolo como «un importante paso» en la dirección de una entidad soberana reconocida internacionalmente.

## La democracia en Oriente Medio vista por Estados Unidos

Estados Unidos hizo pública en la cumbre del G-8 de 9 de junio de 2004 su iniciativa de «Partnership for Progress and a Common Future with the Region of the Broader Middle East and North Africa». La propuesta presentada había sido revisada ante las reacciones que causaron las filtraciones del primer borrador en el que la iniciativa norteamericana se presentaba como un acto unilateral, percibido como una imposición que irritó a los regímenes árabes, y al margen de cualquier cooperación con Europa. Una nueva redacción enfatizaba la importancia del diálogo, la consulta y la cooperación multilateral. No obstante, dicha iniciativa plantea lagunas de gran consideración. Estados Unidos, al igual que Europa<sup>8</sup>, afirma que la promoción de la democracia es un factor crucial para su seguridad y para la estabilidad de la región pero no articula una estrategia clara de aplicación. Es más, se da un doble comportamiento según se trate de los regímenes árabes «amigos» o de los países que mantiene bajo ocupación militar.

Con respecto a los primeros, deposita la necesidad de la reforma en la predisposición de los gobiernos en promover el cambio. Dado el aspecto voluntario del plan propuesto para la reforma, queda poco claro cómo los gobiernos serán incitados a aplicar dicha reforma. Es decir, la iniciativa reside más en su función que en su contenido. Porque con respecto al contenido se plantea un enorme dilema que frena, cuando no paraliza, la obtención de logros en la promoción de la democracia: cómo potenciar la profunda transformación que necesita la región cuando supondría renunciar a los beneficios que extrae Washington de sus relaciones con los gobiernos autoritarios de dicha región. El dilema está en que son más útiles los autoritarismos sumisos que las democracias independientes.

Los gobiernos árabes reaccionaron retóricamente en contra de la injerencia externa, calificándola de imposición de valores y perspectivas occidentales. No obstante, conscientes de que se les pedían ciertos cambios que se adecuasen al discurso de la reforma que defendía Washington, en la cumbre de la Liga de los Estados Árabes de 22-23 de mayo de 2004 se planteó la cuestión y se asumió el principio de la

---

<sup>8</sup> PERTHES, V.: «America's Greater Middle East and Europe», *Middle East Policy*, XI, 3 (2004), pp. 85-97.

reforma pero empleando de manera muy instrumental el argumento del «*home grown democracy*». En consecuencia, las elites dirigentes no han rechazado el principio de la reforma, pero aplicada de manera limitada, gradual y controlable. Es decir, aumentar la visibilidad de la sociedad civil, permitir márgenes de libertad de prensa, ampliar el pluripartidismo, pero sin integrar mecanismos de reparto del poder. Así, a lo largo del año 2005 tuvieron lugar reformas políticas que avanzan hacia un «autoritarismo liberal» con índices de representación pero no de competencia. Arabia Saudí celebró por primera vez elecciones municipales y Egipto hizo una reforma constitucional para elegir por sufragio universal al presidente de la República, aunque imponiendo rígidas condiciones que dificultan las posibilidades de los partidos de oposición, y a continuación permitió una mayor participación de la oposición en las elecciones legislativas<sup>9</sup>.

Con respecto a los países que mantiene bajo ocupación, la política «democratizadora» estadounidense se ha traducido en una injerencia directa basada en la selección de los líderes locales aliados a la superpotencia y en la despreocupación por el proceso institucional democrático.

Estados Unidos ha dado prioridad a los actores y no al proceso, cuando lo realmente relevante en términos democráticos es reforzar el buen funcionamiento de las estructuras y las instituciones y no seleccionar a priori a los actores o líderes. La búsqueda por erigir al perfecto hombre regional proamericano preside de manera hasta caricatural las actuaciones políticas estadounidenses (cuando esa injerencia ha dado siempre desastrosos y contraproducentes resultados) en tanto que se desatiende por completo la garantía de que se den mecanismos de gobierno y gestión transparentes, competitivos y sometidos al estado de derecho. Las experiencias de los procesos políticos en Afganistán e Iraq así lo indican.

### **La «democracia» de Hamid Karzai**

En Afganistán, la invasión norteamericana ha llevado a este país a una crisis aguda de inestabilidad, guerra y deterioro socioeconómico,

---

<sup>9</sup> MARTÍN MUÑOZ, G.: «El Mundo Árabe y la Democratización», *Med.* 2006 (Anuario del Mediterráneo), Barcelona, IEMED & CIDOB, 2006.

junto a un proceso político difícilmente viable y cuestionable en términos democráticos.

Los desafíos para estabilizar Afganistán tras la caída del régimen talibán eran múltiples e ingentes. Las actuaciones prioritarias eran la reconstrucción del país (completamente asolado por sucesivas guerras desde hace más de un cuarto de siglo), el desarme de las milicias de los conocidos como «señores de la guerra», garantizar la seguridad, rehacer una administración capaz de asumir las crecientes necesidades de ayuda humanitaria y poner en práctica un proceso político-institucional basado en principios democráticos. Esa inmensa tarea exigía un gran compromiso de recursos y atención por parte de la comunidad internacional. Asimismo, los dos poderosos e influyentes vecinos de Afganistán, Irán y Pakistán, debían ser inducidos a desempeñar un papel positivo en ese proceso de reconstrucción global del país. Para ello, se debían atender también sus intereses de seguridad, sus necesidades de estabilidad socioeconómica y la garantía de que el régimen de Kabul no fuese un gobierno hostil. La consecución de estos objetivos sigue sin percibirse en el horizonte afgano.

Washington se apoyó en los enemigos de los talibanes para derrocarlos, de manera que el conjunto de líderes clánicos y feudales que componen la Alianza del Norte se convirtieron en los aliados afganos de los estadounidenses. Así, el colapso del régimen talibán significó la vuelta de los comandantes regionales y «señores de la guerra» que en los años noventa habían protagonizado la guerra civil con numerosas exacciones y violaciones de los derechos humanos a sus espaldas. Estos líderes locales compiten entre sí por el poder, el territorio y los recursos del país y todos cuentan con sus propias milicias armadas. En consecuencia, estos actores erigidos como aliados de Estados Unidos e integrados en el proceso político-institucional, difícilmente podían contribuir a la pacificación del país y a su reconstrucción democrática.

El desarme se convertía asimismo en un hecho inalcanzable y dejado de lado por Estados Unidos, tanto porque sus aliados no estaban dispuestos a someterse a este requisito como porque la prioridad estadounidense se basó en dar caza al talibán y a Osama bin Laden garantizándose para ello el control militar de Afganistán y reduciendo la interposición internacional a la región de Kabul a través de la ISAF<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> International Security Assistance Force. Comenzó su labor en Afganistán en diciembre de 2001 con la participación de Austria, Bélgica, Bulgaria, Gran Bretaña,



El problema de la ISAF fue que se basó en un contingente muy reducido para garantizar las necesidades de estabilidad de Afganistán (4.500 soldados) y que llegó con retraso (en 2002), cuando, para poder desempeñar un papel decisivo, deberían haberse desplegado a mediados de noviembre de 2001 en el momento en que las ciudades caían bajo el poder de los «señores» de la Alianza del Norte. Su función debía estar dirigida a apoyar al gobierno interino afgano en el control de la violencia y en la ayuda humanitaria, contribuir al esfuerzo por el desarme y entrenar a un nuevo ejército. Para ello, se debería haber contado con un contingente mínimo de 30.000 soldados cualificados y haberse repartido entre las grandes ciudades y núcleos urbanos, así como en las delimitaciones existentes entre las milicias étnicas y las áreas en crisis humanitaria. Pero, por un lado, las milicias afganas se opusieron a que la misión de la ISAF superase los niveles simbólicos, conscientes de que semejantes fuerzas de interposición debilitarían su poder. Y, por otro, Estados Unidos se oponía a tal despliegue temeroso de que limitasen su total libertad para actuar contra todo sospechoso de estar vinculado a los talibanes y a Al Qaeda. En consecuencia, la ISAF quedó restringida a la región de Kabul y como fuerza de «apoyo» para actuar en casos de emergencia solamente<sup>11</sup>.

El imperativo primero de perseguir militarmente y sin importar los medios empleados a las fuerzas afganas que luchan contra la presencia estadounidense (talibanes, terroristas de Al Qaeda y algunos señores de la guerra hostiles a Estados Unidos<sup>12</sup>), ha marginado la

---

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Suecia, Turquía y España.

<sup>11</sup> La resolución 1510 del Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en octubre de 2003 la expansión del ISAF más allá de Kabul y el liderazgo de la misma por la OTAN.

<sup>12</sup> El caso de Gulbuddin Hekmatiar, antiguo *muyabidin* nacido al calor de la lucha contra los soviéticos, es particularmente destacable. Hekmatiar volvió a Afganistán en febrero de 2002 cuando Irán lo liberó del exilio controlado que ejercían sobre él las autoridades iraníes. Aunque para los intereses nacionales de Irán un Afganistán estable es fundamental (la cuestión de los refugiados afganos y el tráfico de drogas le afectan de manera muy negativa), la amenazante política estadounidense contra Teherán convenció al gobierno iraní de que la prioridad para su seguridad no estaba en contribuir a la seguridad de Afganistán sino en crear problemas a los Estados Unidos en este país liberando al notorio «señor de la guerra» que es Hekmatiar. Esta decisión no puede ser interpretada más que como un fracaso de la política de Estados Unidos en esta región, y concretamente con respecto a Irán, ya que conduce a este país a

preocupación por la reconstrucción, la estabilidad a largo plazo y el establecimiento de un gobierno representativo y basado en las reglas del Estado de derecho.

No por ello se ha logrado el éxito militar contra las diversas resistencias e insurgencias que existen en el terreno afgano. Por el contrario, éstas se han mostrado progresivamente mejor armadas y con mayor capacidad de acciones militares y terroristas.

Varias han sido las voces del sistema estadounidense que explican este fracaso de la administración Bush en su «guerra contra el terrorismo» por las erróneas estrategias del Pentágono en Afganistán. Richard A. Clarke, antiguo asesor sobre terrorismo en el National Security Council, en su libro *Against all Enemies* afirma que el error estuvo en basar el ataque contra Afganistán en la fuerza aérea, destinando muy poco contingente de infantería. «A finales de noviembre la operación no incluyó ningún esfuerzo por que las fuerzas de Estados Unidos sellasen la frontera con Pakistán, atrapasen al liderazgo de Al Qaeda o cortasen su escape». Y, según escribía Seymour M. Hersh en *The New Yorker*, Clarke le había explicado que la Administración había entendido Afganistán como un desvío en el camino hacia Iraq, la guerra que verdaderamente interesaba al presidente. Era necesario reservar fuerzas militares para Iraq<sup>13</sup>. Por otro lado, el coronel retirado Hy Rothstein, experto en guerras no convencionales, escribía un informe solicitado por el Special Operations and Low Intensity Conflict del Departamento de Defensa sobre la guerra en Afganistán, donde escribió que «la campaña de bombardeos no fue el mejor camino para dar caza a Osama Ben Laden ni al liderazgo de Al Qaeda, fue un error convertir el éxito táctico en una victoria militar». Aseguraba que «no se puede combatir a los terroristas con capacidades convencionales [...] los bombardeos aéreos debían haber sido algo excepcional [...] sin embargo éstos impusieron evitables costes de estabilidad y humanitarios»<sup>14</sup> (entre 1.000 y 1.300 muertos civiles en el bombardeo aéreo y unos 3.000 más consecuencia de sus efectos indirectos)<sup>15</sup>.

---

actuar en contra de la estabilización de Afganistán, incluso cuando ello supone actuar en contra de sus propios intereses.

<sup>13</sup> HERSH, S. M.: «Why Bush's Afghanistan problem won't go away», *The New Yorker* (abril de 2004).

<sup>14</sup> Citado por HERSH, S. M.: *op. cit.*

<sup>15</sup> CONETTA, C.: «Operation Enduring Freedom: why a higher rate of civilian casualties?», *PDA, Briefing Report*, 11 (15 de enero de 2002).

Según estimaba J. T. Caruso, director adjunto de la división de contraterrorismo del FBI, la Operación Libertad Duradera en Afganistán redujo la capacidad de Al Qaeda para cometer actos terroristas en un 30 por 100. Cabía esperar unos mejores resultados de las 12.000 bombas y misiles que utilizó Washington en esa Operación y de los 3.000 muertos y 7.000 capturados<sup>16</sup>.

El resultado es que la posguerra está dominada por la inseguridad y el feudalismo de los señores locales, mientras el bandillaje y la producción del opio han recobrado su dinamismo. En 2004, 79 organizaciones de derechos humanos y ayuda humanitaria escribían una carta abierta a la comunidad internacional en la que alertaban de que «para la mayoría de los afganos la seguridad es precaria y está controlada por los señores de la guerra locales, los traficantes de droga o los grupos terroristas. La situación está yendo a peor y no existe ningún plan sobre el terreno para detener la espiral de violencia».

En realidad, si bien toda la atención suele centrarse en la violencia procedente de los talibanes o la red de Al Qaeda, el ámbito de la inseguridad en Afganistán es mucho más extenso dado el caos y la anarquía que experimenta el país, donde el «feudalismo», las tensiones étnicas y los enfrentamientos sectarios se han recrudecido. Se da una extendida práctica de violencia local en torno a cuestiones fundamentales de subsistencia, como el control de la tierra o el agua, o en torno a enfrentamientos sectarios de tipo étnico y a luchas entre los diferentes liderazgos políticos. Esta realidad cotidiana tiene unos efectos demoledores para la vida de la desprotegida población civil afgana y mina la posible legitimidad del gobierno central porque muestra sin disimulo que las estructuras oficiales, como policía o sistema judicial, están aún dominadas por el faccionalismo y la corrupción y, por tanto, están incapacitadas para generar confianza entre la mayor parte de los afganos. En otras ocasiones siguen funcionando las estructuras tradicionales, como las *yirgas* y *shuras* (Consejos de Ancianos) en las que, con escasas excepciones, prevalecen conceptos de autoridad clánica y visiones muy patriarcales y patrimonialistas<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> CONETTA, C.: «Strange Victory: A critical appraisal of Operation Enduring Freedom and the Afghanistan War», *Commonwealth Institute Project on Defense Alternatives Research*, Monograph, 6 (30 de enero de 2002), Cambridge, MA.

<sup>17</sup> «Peacebuilding in Afghanistan», *Internacional Crisis Group*, Asia Report, núm. 64 (2003).

Asimismo, aunque las mejoras en la vida de las mujeres haya sido uno de los más publicitados logros del gobierno postalibán, la realidad está muy lejos de confirmar tal mejora. A pesar de que legalmente las mujeres pueden ir a la escuela y trabajar, la visión tradicional sigue dominando e imponiendo el modelo social y, aunque lo deseen, muchas de ellas y sus familias temen salir a la esfera pública sin el burka, incluso en Kabul.

El proceso de desarme, desmovilización y reintegración de fuerzas, necesario para establecer el gobierno de la ley en el país, no ha alcanzado ningún progreso significativo. En octubre de 2003 Naciones Unidas iniciaba el Afghanistan New Beginnings Program (ANBP) destinado a esos objetivos, pero sus fracasos se han constatado tanto en su capacidad para pacificar las estructuras de las milicias oficializadas (que han encontrado un nuevo resurgir como fuerzas de policía o milicias privadas asociadas a gobernadores o administradores de distritos) como en su capacidad para reducir la amenaza de las milicias que quedan fuera del mandato de la ANBP y que son mantenidas por fuerzas locales y regionales, incluidos algunos partidos políticos legalizados.

Entretanto la economía del país sigue moribunda y Estados Unidos sigue vinculado y trabajando estrechamente con los señores de la guerra locales, muchos de ellos implicados en las redes de tráfico del opio y la heroína, pero cuyas milicias participan con los estadounidenses en sus campañas militares en el país, reforzándolas con ello militar y económicamente y ayudándolas a resistir el control del gobierno central afgano.

En Afganistán el cultivo del opio y el narcotráfico han experimentado un crecimiento alarmante. Según el Afghanistan Opium Survey realizado por el UN Office on Drugs and Crime en 2003, Afganistán produjo 3.600 toneladas de opio, cuando en 2001 la política talibán contra dicha producción la había reducido a 185 toneladas. En consecuencia, desde la invasión norteamericana Afganistán ha ido logrando el lamentable récord de ser líder mundial en esta producción. Por un lado, en un país pauperizado y sometido a los estragos de la guerra, y donde no se ha llevado a cabo ningún proceso de creación de empleo ni pacificación, el cultivo del opio se ha convertido en la base de la subsistencia para los campesinos afganos. Así, hoy día, el opio se cultiva en 28 de las 32 provincias en que se divide el país y, lejos de percibirse una evolución hacia cultivos alternativos, las pers-

pectivas de los cultivadores es ampliar la producción. Muchas de las áreas en las que el informe de Naciones Unidas identifica como grandes productoras son regiones donde Estados Unidos tiene su mayor presencia militar.

Por otro lado, el mercado del opio está controlado por los «señores de la guerra» locales y los cárteles internacionales, y es una fuente sustancial para la obtención de armas entre todos los grupos implicados en el conflicto afgano y en la difusión de la violencia. La situación es tal que el director ejecutivo del programa antidrogas de Naciones Unidas, Antonio María Costa, ha alertado del riesgo de que si no se toman decisiones radicales al respecto Afganistán se convertirá en un «narco-Estado» donde el cáncer es la droga y su metástasis la corrupción, la violencia y el terrorismo, que se extienden dentro del país y en sus fronteras. Si bien Estados Unidos mantiene oficialmente que el mercado del opio a quien beneficia es a los talibanes y a Al Qaeda, olvida mencionar que de dicho tráfico se benefician también los líderes de la llamada Alianza del Norte, aliados suyos contra los talibanes en su operación «Libertad duradera», y que actualmente han sido «burocratizados» a través de la *Loya Jirga* y el gobierno de Karzai en Kabul.

La cuestión está en que quienes dominan el escenario postaliban en Afganistán, Estados Unidos y sus aliados locales, tienen sus propias y particulares prioridades, y no son la pacificación y la estabilidad institucional y democrática del país. Para Estados Unidos se trata de lograr la victoria militar total contra los talibanes y Al Qaeda, cueste lo que cueste. Para sus aliados afganos, es el escenario a través del cual han buscado recomponer sus bases de poder étnicas y sectarias.

Así, un Afganistán dominado por facciones armadas y un liderazgo político fragmentado en grandes caciques locales es un obstáculo infranqueable para poder aplicar con garantías el proceso político que decidió la Conferencia de Bonn en noviembre de 2001.

En la cita de Bonn participaron, como representantes de Afganistán, cuatro grupos: la Alianza del Norte (con 11 delegados); el «Grupo de Roma», realistas que apoyaban la vuelta del rey Zahir Shah, depuesto en 1973 (con 11 delegados); el Grupo de Peshawar, apoyado por Pakistán (con 5 delegados) y el «Grupo de Cyprus», apoyado por Irán (con 5 delegados). El resultado fue la constitución de un Gobierno Afgano Transitorio (GAT) en el que la Alianza del Norte lograba 19 ministerios, el Grupo de Roma 9, el de Peshawar 3 y el de

Cyprus, apoyado por Irán, ninguno. Hamid Karzai fue elegido primer ministro. El cometido del GAT era convocar una *Loya Jirga* que elaborase una nueva Constitución y celebrar elecciones legislativas y presidenciales.

En términos políticos, el GAT estaba dominado esencialmente por la Alianza del Norte y los realistas, a pesar de que éstos últimos estaban muy lejos de contar con base social ni influencia entre los afganos, sus partidos, milicias o grupos tribales. En términos étnicos se daba una supremacía de los tayikos (vinculados a la Alianza del Norte y que asumían los tres principales portafolios: Exteriores, Interior y Defensa) que representan el 25 por 100 de la población, sobre los pastunes que representan el 38 por 100. Es cierto que Karzai es pastún, pero es más cierto que sobre todo era el hombre de Estados Unidos y que había sido impuesto en el cargo por las presiones de Washington. Hamid Karzai es también ciudadano estadounidense, y fue mánager de la gigantesca empresa americana de petróleo Unocal, periodo durante el cual trató sin éxito de convencer al régimen talibán de construir el Trans-Afghan-Pipeline (TAP) que a lo largo de 1.700 kilómetros transportaría el gas de Turkmenistán a través de Afganistán hasta un puerto de Pakistán.

En consecuencia, las sospechas de la dominación tayiko-Estados Unidos del proceso político engendró muchas resistencias y desconfianzas entre importantes grupos pastunes (que además serán objeto de persecución por las fuerzas estadounidenses en algunas regiones sospechosas de complicidad con los talibanes o Al Qaeda). Asimismo, Karzai, aunque pastún, es totalmente dependiente de Estados Unidos porque no cuenta con ninguna milicia ni grupo de poder afgano que le sea verdaderamente leal, de manera que eso le hace dependiente también de los señores de la guerra aliados, cuya alianza es siempre volátil. Todo ello hace de Karzai un líder de gran debilidad y cuya fuerza emana de la potencia extranjera que ocupa militarmente el país, en tanto que su gobierno limita su control a la región de Kabul. En el resto del país dominan poderosos caciques locales como el uzbeko Abdul Rashid Dostum, instalado en Mazar-i-Sharif, que controla cinco provincias del norte y cuenta con una milicia de unos 8.000 hombres; Ismail Khan, de Herat, que controla otras cinco provincias en el oeste y cuya milicia supera los 5.000 hombres; Mohammad Karim Jalili, líder de la coalición shíi hazara, que controla un gran espacio del Afganistán central y cuya milicia alcanza los 8.000

combatientes; Burhanuddin Rabbani, aliado de Abdul Rasul Sayyaf, líder pastún del partido Ittihad-i-Islami apoyado por Arabia Saudí; Gul Agha Shirzai, que controla Kandahar; y un largo etcétera de diversos líderes pastunes. Algunos de ellos, como Dostum y Sayyaf, cuentan con un pasado criminal documentado por Human Rights Watch. Kabul no será más que el escaparate desde donde se trate de convencer al mundo de la ficción de que un proceso democrático está teniendo lugar en Afganistán.

El 3 de noviembre de 2003 se hizo público el borrador de la nueva Constitución afgana, tras un proceso de redacción dominado por el secretismo. Tanto el gobierno afgano como Naciones Unidas lideraron un proceso que se acomodó a las facciones en el poder en Kabul y que careció de la prometida difusión pública. Naciones Unidas justificó dicha carencia por los riesgos de que el proceso público fuese secuestrado por los extremistas y por la confusión que podía generar entre la población. Con respecto a lo primero, el efecto podría haber sido el contrario, reforzar el debate democrático entre los afganos. Con respecto a lo segundo, es una visión orientalista que prefigura, una vez más, que la población nativa no está preparada para distinguir y defender sus derechos. Sobre todo cuando se tiene más prisa por presentar internacionalmente el logro del proceso en sí mismo y no porque sea organizado con el tiempo necesario para que dé los frutos sociales y públicos que garanticen su arraigo en la sociedad.

La Constitución que emanó de ese «proceso» fue un texto, aprobado el 4 de enero de 2004, que garantizaba los deseos de Karzai y su protector estadounidense: la República Islámica de Afganistán quedaba organizada en torno a un sistema ultrapresidencialista (que no integra la figura del primer ministro) con un Parlamento institucionalmente débil. El embajador de Estados Unidos en Kabul, Zalmay Jalilzad, declaraba que «Estados Unidos está a vuestro lado y está orgulloso de ser vuestro socio en la paz y la democracia».

Las elecciones legislativas previstas para junio de 2004 no pudieron celebrarse. La inseguridad y el caos existente en el país las hicieron inviables. La necesidad de que al menos un 70 por 100 de los 10,5 millones de votantes afganos estuviesen registrados para las elecciones a fin de que el proceso pudiese ser considerado creíble fue imposible de alcanzar. Ante esa indisimulable situación, las autoridades estadounidenses presionaron para que al menos se celebrasen las elecciones presidenciales, menos complicadas de organizar, de mane-

ra que «su hombre» en Kabul, Hamid Karzai, fuese elegido presidente y la administración americana pudiese presentarlas como manifestación de que Afganistán «progresa», sobre todo en un momento en que el fracaso de la ocupación de Iraq estaba poniendo en dificultades al presidente Bush.

En los comicios presidenciales afganos, celebrados en octubre de 2004, hubo, como no podía ser de otra manera, intimidación, dirección del voto por parte de los señores de la Alianza del Norte y sobredimensión del registro electoral (siendo muchos los que contaban con varias tarjetas de elector). Washington invirtió unos 30 millones de dólares para garantizar el registro electoral de los refugiados afganos en Pakistán, de etnia pastún, para que votasen instrumentalizando los sentimientos étnicos a favor de Karzai<sup>18</sup>. Sin embargo, de la ayuda prevista para la reconstrucción (unos cinco mil millones de dólares) sólo se habían librado setecientos millones, parte de cuyo dinero era utilizado para garantizar la seguridad de Karzai y para que éste hiciese una campaña electoral en la que, temeroso del riesgo que para su vida suponía salir de la región de Kabul, se optó por que grandes delegaciones de jefes tribales y señores feudales del país le visitasen en su fortaleza de Kabul a expensas del gobierno. Entretanto, organizaciones humanitarias, como Médicos sin Fronteras, tenían que abandonar el país porque Estados Unidos en su intento incesante de instrumentalizar políticamente a su favor dicha ayuda humanitaria, les había hecho perder su imagen de neutralidad convirtiéndoles en blancos de los grupos que combaten la presencia estadounidense en el país.

Karzai ganó las elecciones con un convincente 55,4 por 100 de los votos, pero lo que quedó claramente de manifiesto fue la polarización étnica de Afganistán y la continuada influencia de los líderes con milicias en el proceso político. Junto a Karzai se presentaron poderosos señores de la guerra afganos, como Abdul Rashid Dostum y Muhammad Mohaqeq o independientes con total dependencia del universo

---

<sup>18</sup> Los refugiados afganos en Pakistán son dos millones, y en Irán un millón y medio. Otros 30.000 se reparten entre India, Tayikistán y Uzbekistán. Cerca de otro millón de afganos constituye una población de desplazados de sus hogares dentro de Afganistán. Véase RUIZ, H., y EMERY, M.: «Afghanistan's Refugee Crisis», *MERIP Press Information Note*, 70 (septiembre de 2001), y RUIZ, H.: «Solutions not Imminent for Afghani Displaced and Refugees», *MERIP, Press Information Note*, 78 (diciembre de 2001).



de las diferentes milicias, como Yunus Qanuni. Todos ellos fueron votados en sus respectivos feudos y por sus afiliaciones étnicas<sup>19</sup>.

Aunque Karzai durante su campaña para ser presidente asumió una posición ostensiblemente «anti-señores de la guerra», afirmando que «las milicias privadas son el mayor peligro para el país» y cesó, para probarlo, a dos ministros de su gabinete pertenecientes a ese universo afgano, una vez lograda la elección nombró a Ismail Jan ministro de Energía y al temible Abdul Rashid Dostum jefe del ejército afgano. El entonces embajador estadounidense en Kabul, Zalmay Khalilzad, apoyó estas decisiones afirmando que «la decisión de dar un papel a los hombres fuertes regionales es una política juiciosa»<sup>20</sup>. Washington también ha apoyado la política de Karzai dirigida a garantizar la inmunidad e integración política a todos aquellos talibanes que desistan de su lucha contra el ocupante estadounidense y el nuevo gobierno afgano que éste ha inspirado.

En las elecciones legislativas que tuvieron lugar el 18 de septiembre de 2005, si bien la nueva ley de partidos políticos establecía la prohibición de candidatos con milicias privadas, de los 208 candidatos identificados como tales por la Comisión Electoral, sólo 45 de bajo perfil fueron descalificados.

En dichas elecciones se presentaron 5.800 candidatos para ocupar los 249 escaños de la *Wolesi Jirga* (Casa del Pueblo) y 34 representantes en los Consejos provinciales. Las reglas del juego electoral fueron establecidas por el ultrapresidente Karzai, bajo aprobación estadounidense. Aunque se permitieron los partidos políticos, se impidió a los candidatos que figurasen en sus papeletas electorales las afiliaciones políticas. Esta regla, junto con el sistema de escrutinio elegido, favorecía los liderazgos clánicos y perjudicaba a los partidos políticos recientemente creados, como el Partido Afgano de la Solidaridad, en los cuales se concentran las nuevas personalidades políticas afganas con un pensamiento democrático y muy críticas con el proceso político liderado por Karzai.

En consecuencia, el nuevo Parlamento afgano es un cuerpo legislativo débil, fragmentado y con escasa capacidad operativa. Esa frag-

---

<sup>19</sup> «Afghanistan: From Presidential to Parliamentary Elections», *Asia Report*, 88 (noviembre de 2004).

<sup>20</sup> Citado por KOLHATKAR, S., y INGALLS, J.: «Afghanistan's Parliamentary Elections», *Foreign Policy in Focus* (septiembre de 2005).

mentación se resume en tres grupos principalmente: los tecnócratas de Karzai, los señores de la guerra y un sector de intelectuales e independientes contrarios a los dos primeros. La debilidad de este tercer sector reside en que no recibe ningún verdadero apoyo de la llamada comunidad internacional, no tiene ningún poder económico y es amenazado por los señores de la guerra.

Otro interesante factor a tener en cuenta es el papel de la Unión Europea en Afganistán. Desde la caída del régimen talibán en noviembre de 2001, la Unión Europea ha sido el mayor donante en Afganistán (unos 200 millones de euros anuales en ayuda al desarrollo) y cuenta con una representación en el país (la European Union Special Representative- EUSR). Entre la Comisión Europea y los países miembros, los europeos han aportado un tercio de los fondos aprobados en las conferencias de donantes de Tokyo (2002) y Berlín (2004) y dos tercios del contingente de interposición y de las fuerzas de la Coalición que combaten a los insurgentes. A pesar de ello, la influencia política de la Unión Europea y su visibilidad en Afganistán han sido muy inferiores de lo que deberían ser.

La presencia europea en Afganistán carece de coordinación, visibilidad y operatividad de grupo. Buena parte de ello se debe a que la acción de la ISAF, bajo el paraguas de la OTAN, se ha organizado de manera que cada país dirige un equipo provincial de reconstrucción que es una fortaleza en sí mismo, sin que se haya avanzado en la idea de desarrollar unos niveles mínimos de coordinación civil y militar en un área de participación de los europeos<sup>21</sup>.

Asimismo, la actuación europea para influir positivamente en garantizar los estándares de gobernanza y desarrollo democrático del proceso político afgano ha sido irrelevante. A pesar de contar con una credibilidad considerable entre la población afgana, la implicación europea sobre su futuro a penas se ha dejado sentir. Fue particularmente manifiesto durante el proceso electoral legislativo. Europa pagó el 40 por 100 del total de los costes que dicho proceso supuso, pero perdió la oportunidad de influir para garantizar un sistema de voto más satisfactorio y para apoyar la consolidación y desarrollo de los partidos políticos, siendo éstos un elemento sustantivo para ase-

---

<sup>21</sup> Es muy interesante ver las recomendaciones que al respecto presentaba el *International Crisis Group* en su informe «Rebuilding the Afgan State: The European Union's Role» (noviembre de 2005).

gurar un sistema político estable que, hoy por hoy, no se divide en el futuro afgano.

### **Etnocracia versus democracia en Iraq**

Desde la perspectiva estadounidense, una vez derrocado el régimen de Saddam Husein, los soldados americanos serían recibidos por las masas iraquíes como libertadores y la reducción de tropas podría llevarse a cabo en un periodo breve. Mientras rehacían políticamente Iraq, el petróleo fluiría en abundancia, el país se abriría a unos muy lucrativos negocios y Oriente Medio encontraría el camino de la paz y la estabilidad. La Organización de Naciones Unidas era calificada de «irrelevante» al no dar su aval a la invasión, y el unilateralismo, acompañado de un indisimulado desprecio hacia quienes rechazaron unirse a la invasión, vivía días de euforia. En tan solo unos meses ese guión se hizo pedazos ante la constatación de que la realidad distaba mucho de ser la anunciada por la administración estadounidense.

Crear en el éxito de una invasión y ocupación militar en Iraq desafiaba la lógica y el conocimiento de la historia. La historia nos enseña que todo proceso de ocupación colonial engendra resistencia, por supuesto política, pero también armada; e incluso la determinación de recurrir a atentados terroristas. La particularidad del caso iraquí fue la rapidez e inmediatez con la que esa resistencia se expresó, no siendo ajeno a ello la acumulación intensiva de opresión, injusticia y castigo padecido por este país hasta desembocar en una invasión y ocupación. La intensidad de la reacción fue directamente proporcional a la intensidad de la humillación y la injusticia.

El origen del error estadounidense fue querer situar a Iraq en un total punto cero para rehacerlo a su imagen y semejanza. El «memoricidio» al que se ha sometido a estos ciudadanos, asistiendo, cuando menos, pasivamente a la destrucción de todo su legado cultural y arqueológico<sup>22</sup> e imponiendo una especie de año cero que comienza el 9 de abril de 2003, cuando la tristemente famosa estatua de Saddam Husein cayó en la plaza del Paraíso, ha sido un ejercicio de desprecio hacia un pueblo orgulloso y consciente de su inmenso patrimonio cul-

---

<sup>22</sup> BÁEZ, F.: *La destrucción cultural de Iraq*, Barcelona, Flor del Viento, 2004.

tural e histórico, que no podía sino tener también consecuencias reactivas graves y violentas contra esa bárbara ocupación.

Los estadounidenses decidieron no sólo derrocar al régimen sino demoler el Estado y poner en marcha una desbaazización radical de la sociedad. Esto no sólo generó un vacío institucional que derivó en anarquía sino que en un país donde el Estado era ampliamente distributivo su eliminación trajo consigo una extensión inmensa del desempleo. De manera similar, la pertenencia al Baaz respondía a diferentes realidades y una de ellas era la de ser obligatoria para aquellos que querían garantizarse su estabilidad en la función pública sin que de ello se desprendiese una militancia o adhesión al régimen. La desbaazización sin matices decretada no sólo desempleó a muchos más sino que supuso también una pérdida de recursos humanos para la rehabilitación de las instituciones, ganándose la enajenación de importantes sectores sociales y militares.

Originariamente el proyecto estadounidense se basaba en el establecimiento de un control político directo del país sin delegación de soberanía alguna a los iraquíes. Para encargarse de ello se nombró a Jay Garner quien gobernó desde Bagdad con un exceso de arrogancia tal que hasta sus arrogantes jefes del Pentágono lo consideraron contra-productivo. Su sustitución por Paul Bremer al mando de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC) y la decisión de establecer un Consejo de Gobierno Iraquí (CGI) fueron sólo consecuencia, y reconocimiento implícito, de su incapacidad para controlar la situación. Sin embargo, el CGI representó una transferencia nominal más que real.

La manera y los criterios que presidieron la designación del CGI señalaban las insuficiencias democráticas que iban a presidir el proceso inspirado por Washington. Los 25 miembros que lo compusieron fueron fruto de la negociación entre la APC y un número limitado de grupos políticos y personalidades iraquíes que Estados Unidos seleccionó. Los estadounidenses dieron prioridad a aquellos grupos del exilio con los que llevaba relacionándose e incluso financiando desde mediados de los años noventa, conocidos como el Grupo de los Siete<sup>23</sup>, frente a los actores internos. Incapaces de consensuar un re-

---

<sup>23</sup> El Congreso Nacional Iraquí de Ahmad Chalabi; la Alianza Nacional Iraquí de Iyad Allawi; los dos partidos kurdos —el Partido Democrático Kurdo y la Unión Patriótica del Kurdistan—; Adnan Pachahi, que fue ministro de exteriores del gobierno anterior a la toma de poder del Baaz en 1968; el Consejo Supremo de la Revolución Islámica Iraquí (CSRII) y una facción del partido al-Da`wa, ambos chiíes.

presentante del CGI, acordaron finalmente un sistema rotatorio por orden alfabético árabe que tampoco contribuyó a generar credibilidad entre la población iraquí. Otras cuestiones de tipo simbólico tampoco ayudaron a conectar al CGI con la población. Su primera decisión fue declarar el 9 de abril de 2003 (día en que cayó Bagdad) el día de la fiesta nacional, lo cual fue bien recibido en Estados Unidos y pésimamente asumido por los iraquíes, para quienes el 14 de julio de 1958, hasta entonces su fiesta nacional, es una fecha histórica que conmemora el derrocamiento de la monarquía y el inicio de su verdadera independencia con respecto a Gran Bretaña. La dimensión del error fue tal que el CGI tuvo que hacer una declaración diciendo que el 9 de abril es una de las fiestas nacionales de Iraq.

Si bien el CGI contaba con algunos poderes ejecutivos, relativos al presupuesto nacional y la designación de ministros, Paul Bremer se reservó el derecho de veto a sus decisiones. Aunque nombraron un ejecutivo (cada miembro del CGI nombró a uno), cada ministerio quedó bajo la supervisión de un «asesor» de la APC. El 12 de agosto el CGI nombró una Comisión Nacional Constitucional destinada a «movilizar a todos los segmentos de la sociedad para decidir el mejor mecanismo para la elaboración de una Constitución». Pero el secretismo que caracterizó a dicha comisión reforzó la certeza de los iraquíes sobre su falta de independencia. Ni siquiera se conocieron los miembros de dicha comisión. Al parecer, uno de sus miembros fue Kanan Makiya, quien, perteneciente al grupo de Chalabi, se distinguió antes de la guerra por su apoyo incondicional a Washington y su defensa de la invasión.

En conclusión, dominado por las tensiones internas, por una imagen que representaba más a los iraquíes del exterior que a los actores internos, por su secretismo y opacidad, por su inacción con respecto a cuestiones claves como seguridad, electricidad y empleo, y por su falta de soberanía real, el CGI funcionó como apéndice de la ocupación.

Paralelamente a este proceso, los estadounidenses optaron desde un primer momento por una estrategia basada en alentar el comunitarismo entre los iraquíes. Washington y sus seguidores iraquíes del exilio mostraron tener una visión simplista de la diversidad iraquí y de la complejidad de su sociedad, reduciéndola a un marco estrecho de sectarismo, comunitarismo y tribalismo. Si bien era fundamental que el nuevo Estado siguiese un modelo descentralizado, era también

determinante que esa descentralización favoreciese una interpretación moderna de la diversidad, en vez de afianzar las estructuras más arcaicas del comunitarismo, que es por lo que optó Estados Unidos con su modelo de muestrario étnico y confesional representado por elites cooptadas. Se repartieron los Ministerios, como el del Petróleo, el de Economía, el de Asuntos Exteriores y el de Interior, de acuerdo con criterios de filiación étnica y sectaria. El sistema elegido por Estados Unidos de cuotas étnicas y confesionales, que favorece la evolución política a favor de partidos sectarios, anunciaba el sectarismo creciente en que se iba a convertir la escena política iraquí.

Esta estrategia decidida por Washington en Iraq no era ajena a la improvisación y la búsqueda de instrumentalización de las tres grandes identidades iraquíes: la kurda, la suní y la chíí, potenciando una deriva de enfrentamiento entre ellos, situación que nunca antes había vivido Iraq hasta la ocupación estadounidense. Una cuestión es que por el establecimiento de un Estado ultracentralizado y excluyente kurdos y chííes hubiesen estado históricamente enfrentados a los regímenes que representaron ese Estado reclamando su reconocimiento e integración, y otra que hubiese reacciones sectarias entre las comunidades entre sí. Esto último no había ocurrido en Iraq donde las distintas comunidades se han aceptado y mezclado históricamente.

La siguiente etapa del proceso político iraquí se concretó en un nuevo escenario en el que Estados Unidos ponía fin a la APC, Bremen salía de Iraq y le sustituía un embajador estadounidense, queriendo dar la apariencia de que se iniciaba una nueva andadura soberana iraquí. Los iraquíes eran convocados el 30 de enero de 2005 para elegir los 275 diputados que compondrían una Asamblea Nacional que elegiría a un presidente y dos vicepresidentes, quienes a su vez nombrarían un primer ministro y un nuevo gobierno. La Asamblea tenía como misión fundamental la redacción de una Constitución para Iraq, que después debía ser aprobada por referéndum, abriéndose un nuevo proceso electoral que elegiría una nueva Asamblea.

El contexto socioeconómico y de inseguridad en que se enmarcaba dicho proceso era draconiano. Por entonces, la sociedad iraquí había padecido la muerte de 100.000 civiles desde la invasión en marzo del 2003<sup>24</sup>. Unido a esto, a medida que la resistencia se fue

---

<sup>24</sup> Si bien no existe ninguna voluntad política de contabilizar los muertos iraquíes, estudios independientes, como el realizado por la Johns Hopkins Bloomberg School

extendiendo a ciudades enteras en la región del triángulo suní, con Faluya como modelo, el ejército estadounidense optó por campañas de asedio y bombardeo indiscriminado en dichas ciudades que, además de generar un enorme número de muertos civiles, iba sometiendo a miles de iraquíes a la condición de refugiados desposeídos de casa y bienes.

El creciente desmoronamiento de la ley y el orden que engendró la demolición del Estado iraquí, primero, y la dinámica de ocupación y resistencia armada, después, había favorecido el desarrollo del crimen, la delincuencia y el secuestro al servicio de la extorsión económica elevando los índices de inseguridad ciudadana a niveles insostenibles para la vida cotidiana de la mayor parte de los que habitan o residen en el país. Asimismo, los costes sociales y económicos eran muy elevados<sup>25</sup>: el desempleo iraquí oscilaba en torno al 30 por 100 antes de la ocupación estadounidense y en 2005 alcanzaba entre un 60 y un 70 por 100. Y a pesar de que la administración estadounidense afirmaba que estaba creando muchos puestos de trabajo en la reconstrucción del país, de hecho sólo había empleado a 120.000 de los 7 millones que constituyen la fuerza de trabajo iraquí.

La reconstrucción apenas había avanzado, tanto porque la inseguridad y la violencia son una losa insuperable como porque el presupuesto adjudicado para la misma se estaba desviando para financiar el incremento de las fuerzas militares y las compañías privadas contratadas para garantizar la seguridad al personal estadounidense y a las autoridades iraquíes que colaboraban con la ocupación. A ello se sumaba, por un lado, que los insuficientes proyectos de reconstrucción en marcha habían sido adjudicados a compañías estadounidenses en vez de a experimentadas firmas iraquíes que hubiesen contratado a un número mucho mayor de trabajadores del país; y, por otro, el despilfarro económico que supusieron los fraudes detectados en la compañía estadounidense que ha obtenido la mayor parte de los con-

---

of Public Health publicada en la prestigiosa revista médica *The Lancet* (*El País*, 29 de octubre de 2004), señalan que según estimaciones muy prudentes habrían muerto 100.000 civiles iraquíes desde el comienzo de la invasión hasta la fecha de realización del estudio, muchos de los cuales procedían de los bombardeos y las operaciones terrestres del ejército estadounidense.

<sup>25</sup> Datos aportados por el informe «A Failed “Transition”: the Mounting Costs of the Iraq War», *The Institute for Policy Studies and Foreign Policy In Focus* (septiembre de 2004).

tratos, Halliburton, investigada por cargar 160 millones de dólares en gastos por alimentos que nunca han sido servidos a las tropas estadounidenses y otros 60 millones por facturas falsas en gastos de fuel. Más tarde también se detectó la «desaparición» de 8.000 millones de dólares en fondos para la reconstrucción, que son fondos de dinero iraquí, que quedaban bajo la responsabilidad de Paul Bremer como cabeza de la Autoridad Provisional de la Coalición.

Los niveles de la sanidad y la educación habían quedado sometidos por la destrucción de las infraestructuras a un nivel de sociedad preindustrial. La UNICEF calculó que centenares de escuelas habían sido destruidas desde que comenzó la invasión en marzo de 2003 y la violencia progresiva impide su reconstrucción, la distribución de equipamiento y su funcionamiento regular. En el mejor de los casos, los iraquíes cuentan con menos de ocho horas de energía eléctrica. Asimismo, la destrucción del medioambiente está generando desequilibrios graves en el ecosistema y la destrucción de fuentes de agua y de los sistemas de potabilización y canalización de aguas residuales está poniendo en alto riesgo la salubridad y la salud de la mayoría de los iraquíes. A ello se sumarán las consecuencias letales que en el futuro va a suponer para miles de iraquíes la utilización de uranio empobrecido por los ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña durante los bombardeos de marzo de 2003 (se calcula que se utilizaron entre 1.100 y 2.200 toneladas de armamento tóxico y radioactivo).

El petróleo se convirtió en un objetivo prioritario de ataques por parte de la resistencia. A lo largo del año 2004 se dio una media estimada de 118 ataques contra las infraestructuras petrolíferas, lo que significaba que la producción de petróleo iraquí no había logrado superar los ya de por sí bajos niveles de producción anteriores a la invasión, por estar sometidos a las draconianas restricciones del embargo decretado desde 1991.

A lo largo de 2004 salió a la luz el ejercicio de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas ocupantes. Las torturas y abusos a los que eran sometidos los prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib (siguiendo el modelo de los centros de internamiento de Guantánamo y Afganistán), las detenciones indiscriminadas (la Cruz Roja afirmó que el 70 por 100 de los prisioneros de Abu Ghraib no tendrían que estar detenidos) y el abandono de la aplicación de la Convención de Ginebra, sacaban a la luz una de las caras más siniestras de la ocupación.



En este marco de subsistencia diaria, los iraquíes iban a participar en las elecciones de enero de 2005 esperando ver el final de la ocupación extranjera y confiando en que el nuevo gobierno les ayudase a mejorar su futuro tanto en seguridad, como en salud, educación, empleo, electricidad, agua... niveles de subsistencia que el gobierno provisional anterior había ignorado en una mezcla de incapacidad y falta de voluntad en sus prioridades.

Un primer factor a tener en cuenta es que las elecciones del 30 de enero se inscribían en un proceso político y electoral que había sido formulado y dirigido por las autoridades de la ocupación estadounidense, contraviniendo la Convención de la Haya de 1907, firmada por Estados Unidos, que prohíbe que el poder ocupante cree cualquier cambio permanente en el gobierno del territorio ocupado. Esas elecciones se celebraron bajo una ley electoral y con una Comisión Electoral Iraquí, llamada «Independiente» pero redactada y nombrada por Paul Bremen antes de partir de Iraq. Tuvieron lugar en unas condiciones de inseguridad tales que la mayor parte de los candidatos mantuvo su nombre en secreto, no pudo celebrar campaña electoral, ni se pudo conocer la ubicación de los colegios electorales, y durante tres días el país fue sometido a un cierre de fronteras y estado de excepción draconianos. Tampoco contaron con la supervisión y observación internacional que hubiese podido dar credibilidad a un proceso organizado en tan difíciles y complejas circunstancias. El pequeño grupo de «asesores» internacionales liderados por Canadá, que afirmaron que las elecciones cumplían con los «estándares» internacionales, no salió ni por un momento de Jordania. El Centro estadounidense Carter, que ha supervisado elecciones en todo el mundo desde hace más de una década, declinó participar en las de Iraq, pero su portavoz -un día antes de dichas elecciones-, al enumerar los criterios que determinan la legitimidad de un proceso electoral (la capacidad de los votantes para votar en un entorno libre y seguro, una comisión electoral independiente libremente elegida, y unas condiciones para votar sin miedo o intimidación), señaló que éstos no se daban en Iraq<sup>26</sup>.

La participación proclamada de un 58 por 100 era una cifra que, si bien sirvió para proclamar el «éxito» de las elecciones, no reflejaba la realidad del país. Ese 58 por 100 se basaba en los 8,3 millones de

---

<sup>26</sup> Citado por BENNIS, Ph.: *Institute for Policy Studies* (2 de febrero de 2005).

votantes sobre los 14 millones de iraquíes que se registraron en el censo electoral, pero los votantes reales eran unos 20 millones, con lo cual la cifra real era de un 41 por 100. Pero en este cálculo había que tener en cuenta el enorme peso que había tenido el voto kurdo, proamericano y participe en la ocupación, que sumó un cuarto de los votos totales, de manera que sólo votaron unos seis millones de árabes iraquíes (suníes y chiíes) de los casi 18 millones de electores potenciales árabes.

El modelo de escrutinio, establecido también por las autoridades estadounidenses, se basó en una sola circunscripción nacional con reparto proporcional, lo cual respondía a un interés manifiesto por favorecer la sobrerrepresentación del voto kurdo, aliado de Estados Unidos, frente al árabe suní y chií. Tanto porque la seguridad en la zona kurda garantizaba una afluencia electoral imposible de conseguir en la situación de inseguridad que se da en importantes zonas suníes y de manera intermedia en las chiíes, como porque la motivación kurda a favor del voto estaba mucho más garantizada por los beneficios que la presencia estadounidense les ha reportado desde 1991, el elevado porcentaje de participación estaba asegurado en el Kurdistán, lo que se tradujo en una sobredimensión de sus resultados electorales en detrimento de los chiíes.

Los resultados de estas elecciones dieron a la lista chií (Alianza Iraquí Unida), avalada por Ali Sistani, el 48 por 100 de los votos, unos 140 escaños; la lista kurda obtuvo el 26 por 100 de los sufragios (con una participación entre 80-90 por 100) correspondiéndole unos 75 escaños y la de Iyad Allawi el 13 por 100 con 38 diputados. Los movimientos políticos suníes representativos estaban ausentes. Para éstos, el sistema electoral basado en una circunscripción nacional se traducía en una manifiesta e inevitable debilidad, al ser sus regiones y ciudades las más afectadas por la inseguridad, donde los electores no pudieron registrarse (como en Mosul, con 3 millones de habitantes), difícilmente se animaban a votar o simplemente no se podían celebrar las elecciones. Esa fue la razón determinante por la que los principales líderes suníes optaron por el boicot electoral revalorizándose en negativo. La falta de representación significativa suní en un Parlamento encargado de supervisar la elaboración de una nueva Constitución cuestionaba todo el proceso.

Pero a ello se unía un factor determinante: la división del poder entre el nuevo gobierno iraquí y las autoridades de la ocupación esta-

dounidense. Toda una serie de niveles de poder había quedado depositada en Estados Unidos sometiendo a severas limitaciones la soberanía de las instituciones electas iraquíes. La *Transitional Administrative Law*, redactada en marzo de 2004 por la llamada Autoridad Provisional de la Coalición, es decir por Paul Bremer, era la ley básica que debía regir Iraq hasta la aprobación de su Constitución permanente. En ella quedaba establecido que las fuerzas militares iraquíes seguirían bajo mando estadounidense. Asimismo, se establecía que el plan de reducción de la deuda iraquí acordado en noviembre de 2004, por el que algunas naciones acreedoras perdonarían de manera escalonada la deuda a Iraq, se sometía a la condición de que el gobierno iraquí siguiese un programa de liberalización del FMI. Dicho programa daba prioridad a la privatización y a los inversores extranjeros, pero no al desempleo o a la pobreza, y seguía los designios de la buscada privatización económica iraquí deseada por Washington<sup>27</sup>.

Todo ello abría un escenario en el que, no sólo el poder militar, sino también el económico iban a seguir estando bajo control estadounidense, cuando un factor de credibilidad para el nuevo gobierno era dedicar lo fundamental de sus esfuerzos a mejorar la penuria y la precaria subsistencia socioeconómica, médica, educativa, etcétera de los iraquíes. Una razón sustancial por la que habían ido a votar.

Unido a esto, los presidentes de Comisiones de control claves, como el Inspector General de Iraq, la Comisión de Integridad Pública o de Comunicación y Medios, fueron nombrados por Paul Bremer en 2004 por cinco años. El Consejo general de Jueces, así como jueces individuales y fiscales fueron seleccionados y entrenados por las autoridades estadounidenses, y dichas designaciones estaban dominadas por los exiliados iraquíes que Washington reclutó tras la ocupación. Y todos los ministerios e instituciones iraquíes contaban con más de 40.000 «asesores» estadounidenses con una enorme capacidad de control y de gestión.

El proceso de elaboración de la Constitución fue tortuoso y poco transparente. La situación de confusión aumentó cuando acabaron circulando tres borradores distintos sin saber a ciencia cierta cuál era el definitivo. Todo ello no hizo sino agrandar progresivamente las

---

<sup>27</sup> AL-ALI, Z.: «The IMF and the Future of Iraq», *Middle East Report* (7 de diciembre de 2004).

divisiones entre los árabes suníes y los chiíes y kurdos, así como acentuar los sentimientos sectarios y comunitaristas entre estos tres grupos demográficos dominantes en Iraq.

Faltó una estrategia estadounidense que utilizase su indudable liderazgo para atenuar la marginación de los suníes y prestar atención a sus inquietudes, de manera que no se les transmitiese la idea de que eran los grandes perdedores en la nueva remodelación del Estado. Por el contrario, si bien era la ocasión para que tanto Washington como el gobierno iraquí (de predominio chií y kurdo) mostrasen su habilidad para debilitar a la resistencia a través de una estrategia política de inclusión árabe suní, la falta de responsabilidad de Estado que mostraron los líderes chiíes y kurdos a favor de sus intereses particulares y la prioridad estadounidense de que se cumpliesen los plazos establecidos por encima de los resultados para hacer frente a su cada vez más difícil agenda interior sobre Iraq, llevaron a la situación inversa a la deseada: se ha enardecido aún más la resistencia y favorecido la violencia étnica y sectaria con serios riesgos de derivar en guerra civil.

Por un lado, el texto constitucional iraquí tiene dos defectos sustanciales: la falta de consenso y la ambigüedad/debilidad del propio texto. Los árabes suníes se sintieron progresivamente marginados de las negociaciones que comenzaron en agosto de 2005. De hecho, el Comité Constitucional acabó siendo trasladado a un foro informal de líderes chiíes y kurdos cuando la presión estadounidense les exigió que cumpliesen con el plazo establecido y renunciasen a una ampliación legalmente posible de seis meses. Los borradores que salían de dicho foro eran expuestos a los suníes, los cuales a su vez los rechazaban dado que se sentían excluidos y su sentimiento de «complot» se afirmaba al considerar que lo que se les proponía amenazaba su propia existencia.

Las objeciones suníes se referían de manera especial a la nueva estructura federal que exigían kurdos y chiíes porque, desde su punto de vista, facilitaba implícitamente la disolución del país, lo que les dejaría cercados territorialmente y sin fuentes de riqueza dado que los yacimientos petrolíferos están en el norte y sur. Por su parte, aceptaban, dado que ya es un hecho consumado, la idea de una región kurda (pero en los límites actuales, sin incluir Kirkuk) e integrar ciertos niveles de descentralización, pero su rechazo era radical con respecto a la pretensión de los líderes chiíes en el gobierno de crear una enor-

me región federal en el sur. También se mostraban recelosos con respecto al establecimiento de la promulgación de la «desbaazización» por temor a que fuese un instrumento arbitrario que se convirtiese en un proceso de «dessunización» que acabase penalizándolos. Asimismo, hubo importantes divergencias sobre la definición de la identidad nacional. El primer borrador del 29 de agosto de 2005 decía que Iraq formaba parte del mundo islámico y «su pueblo árabe de la nación árabe». Ésta era una definición promovida por los kurdos pero que encontró un gran rechazo en los árabes suníes (aunque también entre algunos chiíes) porque volvían a ver en ella la voluntad de desintegrar en el futuro al país. Esta definición en verdad sublevó a todos los Estados árabes, y bajo presión de la Liga Árabe, el borrador del 13 de septiembre enmendó esta premisa sustituyéndola por «Iraq es miembro fundador de la Liga Árabe y está comprometido con su Carta». Solución aparentemente salomónica pero que no acabó de satisfacer a nadie y dejó en la atmósfera un sentimiento de sospecha y amenaza a una identidad iraquí históricamente traducida a través de la arabidad, lo que inquieta a muchos y alimenta aún más los sentimientos ultranacionalistas y sectarios.

Lo cierto es que cuestiones tan sensibles e inflamables como la definición de las identidades nacionales, independientemente de que sea una realidad aún por resolver en Iraq y Oriente Medio en general, se están planteando en un contexto dominado por el oportunismo político y en un entorno de violencia e invasión extranjera, lo que lo convierte en un proceso completamente contraproducente para poder ser encauzado de manera pacífica y consensuada. Por el contrario, se convierte en un factor más de enfrentamiento, repliegue identitario y radicalización que lejos de resolverse lo empeora.

Ante la falta de consenso en todas estas cuestiones fundamentales, cumplir la agenda se convirtió en el mejor signo del éxito desde la perspectiva estadounidense, aunque éste sólo fuese superficial y aparente. Para lograr cumplir el calendario y que se pudiese celebrar el referéndum de ratificación el 15 de octubre se presentó un nuevo borrador el 13 de septiembre, que asumió el Parlamento transitorio pero sin emitir voto por, una vez más, la falta de consenso mayoritario. En consecuencia, prevaleció el proceso en sí mismo sobre los resultados, de manera que lo más significativo del nuevo texto constitucional son sus lagunas y no su contenido. Para eludir la realidad manifiesta de que no se llegaba a ningún acuerdo sobre las cuestiones

claves en disputa se decidió trasladar la decisión sobre las mismas al Parlamento que se iba a elegir el 15 de diciembre de 2005. Así, la Constitución se ahoga en la ambigüedad al establecer un sistema federal en el que no se define su esencia ni estructura, más allá de la ya existente región kurda. Esta falta de definición no hace sino vaticinar una enorme discordia en el futuro próximo, teniendo en cuenta, además, que el peso demográfico chíí asegura su gran presencia en el legislativo y por tanto su papel decisivo en la redacción de las futuras leyes.

El 15 de octubre se celebró el referéndum de la Constitución, el cual fue aprobado bajo mínimos. La Ley Administrativa Transitoria establecía que si no era votada positivamente por dos tercios de los votantes en tres provincias del país, el texto quedaba anulado. Lo que en principio fue una improvisada concesión a los kurdos se convirtió en un posible instrumento para quienes los estadounidenses consideran la comunidad más hostil, los suníes. Finalmente el proceso fue tortuoso y poco transparente, dejando una estela de posibles fraudes y manipulaciones.

En realidad, si se piensa en la difícil situación de Iraq, desarrollar una redacción constitucional en sólo dos meses dejando de lado la exigible necesidad de consenso, única vía para empezar a asentar la estabilidad nacional del país, y renunciando a que fuese la Constitución la que estableciese el nivel de descentralización del Estado en vez de leyes posteriores más vulnerables de ser enmendadas por los diferentes gobiernos, muestra la irresponsabilidad y la improvisación en que se está llevando a cabo un proceso cuyas consecuencias son determinantes no sólo para Iraq y toda la región de Oriente Medio, sino también para el mundo en general.

Por el contrario, lo que el proceso de reconstrucción político-estatal iraquí está promoviendo es el sentimiento etno-sectario frente al ciudadano. Se están consolidando identidades aisladas y enfrentadas que sólo se rigen por intereses de grupo creando una transformación sociológica muy peligrosa de afirmación de la identidad comunitaria. De hecho, es una enorme simplificación de la identidad que traiciona la diversidad que caracteriza los conceptos de «suní» o «chíí». Primero, porque no son grupos compactos ni en términos políticos ni sociales. Y, segundo, porque lo chíí es también árabe, kurdo y turcomano; como lo es a su vez lo suní. No obstante, se ha ido imponiendo esa polarización rígida y artificial, que nunca

antes existió en Iraq, entre kurdos, chiíes y suníes que está empezando a forjar identidades excluyentes y en conflicto. El liderazgo político del gobierno iraquí ha tenido una enorme responsabilidad en ello. Los kurdos, primero de todos, buscan crear las condiciones para su futura secesión, y los líderes chiíes del Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Iraq (CSRII) y de al-Da`wa buscan maximizar sus propios beneficios mostrándose indiferentes a la viabilidad del futuro Estado iraquí. Ante esto se está afirmando una identidad árabe suní que se siente en peligro.

Existe una interesante excepción en este marco de división comunitaria representada por el movimiento chií que lidera Muqtada al-Sadr, quien mantiene buenas relaciones, incluso a veces alianzas tácticas, con representativos grupos políticos árabes suníes como la Asociación de Ulemas. Muqtada al-Sadr es sin duda un actor de gran peso en la actual escena política iraquí dado que cuenta con una gran popularidad y capacidad de movilización social, si bien desde la revuelta de Najaf en agosto de 2004 ha mantenido una línea de contención y ha evitado enfrentarse a las moderadas directrices que emanan del entorno de Ali Sistani. Su legitimidad entre los chiíes emana de su procedencia familiar: hijo del ayatolá Muhammad Sadiq Sadr y sobrino del gran *marya`* Muhammad Baqr al-Sadr, ambos asesinados por el régimen de Saddam Husein. No obstante, ni su juventud ni su abierto militancia le permiten convertirse en una autoridad islámica como es Ali Sistani. Es más un líder político que espiritual y por ello hasta la actualidad ha mantenido una posición de respeto y no confrontación con las directrices que emanan del *marya`* Sistani<sup>28</sup>.

Su popularidad procede tanto del apoyo que su movimiento aporta a los sectores chiíes más desprotegidos como al hecho fundamental de que no pertenece al dominante liderazgo político que ocupan los iraquíes exiliados llegados al país con la invasión estadounidense. Desde la ocupación, Estados Unidos ha favorecido de manera manifiesta la entrada en el gobierno iraquí de una clase política procedente del exterior que poco ha logrado enlazar con el sentimiento popular. Por el contrario, son frecuentemente vistos como ajenos a la realidad del país, dedicados a rentabilizar personalmente su forma-

---

<sup>28</sup> La cualificación de *marya`* es la máxima designación de autoridad espiritual-religiosa entre los chiíes. Quien la obtiene es «ejemplo de imitación», es decir, sus opiniones se consideran las más correctas y válidas.

ción adquirida en el extranjero y viajando continuamente, en tanto que han sido incapaces de mejorar la draconiana situación interna que vive la inmensa mayoría de los ciudadanos. Esta circunstancia afecta también a los líderes chiíes en el gobierno, venidos de su exilio en Teherán (los del CSRII) o del mundo occidental, como Ibrahim Ja'fari o el portavoz de su gobierno, Laith Kubba. El nacionalismo «interior iraquí» que transmite Muqtada al-Sadr enlaza con el resentimiento que sienten muchos iraquíes hacia esos «hombres del exterior» que llegaron al país con o gracias a los tanques de la ocupación. Él representa, frente a éstos, el nacionalismo interior iraquí.

Entre los suníes, Muqtada al-Sadr cuenta con una considerable popularidad tanto por su inamovible posición contra la ocupación extranjera como porque ha sido el único líder chií que desde el primer momento denunció el asalto brutal de las tropas estadounidenses de Faluya en noviembre de 2004, convertido en un símbolo del «martirologio» suní y que fue silenciosamente asumido por los otros líderes chiíes. Incluso Ali Sistani tardó mucho tiempo en emitir una declaración muy moderada al respecto.

Muqtada al-Sadr es, por tanto, una personalidad poliédrica cuyo movimiento político, ya hoy día relevante, lo será aún más en el futuro. Sin embargo, se da la circunstancia de que si bien ha mostrado una mayor responsabilidad de Estado que sus correligionarios que están en el gobierno y debería estar llamado a desempeñar un papel de mediador sustancial para evitar derivas de enfrentamiento civil, su consistente posición en contra de la ocupación y su reivindicación constante de un calendario de salida de las tropas americanas, le han convertido en un actor no deseado por la política estadounidense en Iraq. Por el contrario, su rebeldía y hostilidad contra la ocupación le han valido la catalogación de radical y su marginación y acoso por el liderazgo estadounidense.

El proceso electoral del 15 de diciembre de 2005 vino a corroborar que el nuevo diseño iraquí se dibuja en torno a líneas sectarias donde los suníes votan por los suníes, los chiíes por los chiíes y los kurdos por los kurdos. En Iraq se ha casi institucionalizado una división comunitaria donde no parecen tener cabida los proyectos nacionales. Hay que tener en cuenta que estos riesgos de enfrentamiento sectario no se limitan a Iraq, sino que fácilmente pueden desbordarse a todo Oriente Medio. El antagonismo suní-chií puede alcanzar a los Estados suníes de Arabia Saudí y del Golfo, donde hay una impor-



tante población chií; y los sueños separatistas kurdos pueden tener enormes implicaciones en Turquía, Siria e Irán.

La administración Bush no ha cesado de echar leña al fuego a la divisoria étnico-confesional, quizás pensando que era el mejor atajo para no afrontar las tremendas tensiones sociales de Iraq y considerando que una sociedad dividida es más fácil de manipular. Pero las cosas no van bien para Estados Unidos. En contra de sus deseos, la lista chií —la Alianza Unida Iraquí— fue la principal ganadora, en tanto que sus aliados más íntimos —la lista de Ayad Alawi y Ahmad Chalabi— experimentaron un inevitable fracaso.

A diferencia de las elecciones de enero de 2005, significativos grupos políticos suníes participaron en estos comicios. Incluso la influyente Asociación de Ulemas, si bien no participó, tampoco defendió el boicot, sino la libertad de decisión. Pero el cambio es táctico, no político. Han decidido estar presentes en el nuevo Parlamento para constituir un grupo de presión con respecto a sus dos grandes prioridades: impedir que las futuras leyes sobre el modelo federal no supongan una amenaza para su existencia y conseguir la retirada del ejército de ocupación estadounidense. Junto a esto, el movimiento de Muqtada al-Sadr ha aumentado notablemente su representación dentro de la lista chií, de manera que se perfila un grupo parlamentario que comparte ambos objetivos primordiales y que puede ser muy activo y movilizador.

Los Estados Unidos se han encontrado en la difícil situación, que ellos mismos han creado, de tener que integrar a los árabes suníes después de haber seguido una política contra ellos que les ha radicalizado y convertido en el emblema de la resistencia. Es por ello, para facilitar su inclusión, por lo que se modificó en septiembre pasado la ley electoral para equilibrar el reparto de escaños. La ley actual organiza el escrutinio en torno a 18 circunscripciones que coinciden con las 18 provincias administrativas iraquíes, y a cada cual le corresponde un número de escaños de acuerdo con el número de su población, lo que asegura la representación árabe suní.

La inclusión árabe suní para Washington significa dar credibilidad al proceso y, sobre todo, tratar de debilitar su resistencia. Dentro de la errática política de Estados Unidos en Iraq, es interesante observar un nuevo giro en su discurso con respecto a esta última cuestión. El embajador de Estados Unidos en Bagdad, Zalmay Khalizad, y el portavoz del mando estadounidense en dicha capital mostraron des-

de finales de noviembre de 2005 signos de cambio de actitud con respecto a las organizaciones de la resistencia suní. El 24 de noviembre el general Rick Lynch enfatizaba sobre las diferencias entre los llamados «combatientes extranjeros»<sup>29</sup>, los «rechacionistas» (*rejectionists*) y los «sadamistas»<sup>30</sup>. Se refirió a que los «*rejectionists*» podrían «convertirse en parte de la solución y no del problema». En la misma semana, Khalizad, en una entrevista en la ABC News, decía que estaba preparado para abrir negociaciones con los insurgentes suníes, pero no con los «sadamistas» ni los «combatientes extranjeros». Es decir, ahora los objetivos divergentes entre la resistencia suní y los al-qaedistas parecen ser tomados en cuenta en vez de ser ignorados como en el pasado reciente. Y Lynch añadía que «la principal vía para desbaratar la capacidad de los «*rejectionists*» es a través de la implicación política».

En este contexto, la participación en las elecciones de los grupos políticos del Consejo Neobaazista para el Diálogo Nacional dirigido por Salih Mutlak y el Frente Suní del Acuerdo Nacional, de tendencia islamista y liderado por Adnan Dulaimi, ambos vinculados a la resistencia árabe suní, parece ser vista por Washington como una vía para iniciar ese camino de negociación con la resistencia árabe suní. La cuestión está en que ese difícil camino exigiría el calendario definitivo de la retirada de todas las tropas estadounidenses, única posible solución al conflicto iraquí, y es difícil imaginar que eso esté en la perspectiva del presidente Bush. En cualquier caso, muestra una vez más el carácter táctico e improvisado de la política estadounidense en Iraq, sometida primero de todo a su crecientemente difícil agenda interior. Washington necesita articular un escenario de repliegues militares —que no retirada— para transmitir a sus ciudadanos que los soldados empiezan a volver a casa y sólo puede hacerlo si apacigua a la gran resistencia árabe suní, lo cual es una tarea casi imposible en las condiciones de tutela militar y política en que quiere dejar permanentemente al país, razón sustancial por la que lo invadió en 2003. Asi-

---

<sup>29</sup> Éste es el nombre habitualmente utilizado por la administración americana para definir a los al-qaedistas. Si se nos permite un toque de ironía, no deja de ser paradójico el uso de este nombre de «combatientes extranjeros» por parte de los estadounidenses ¿Acaso ellos se consideran «combatientes iraquíes»?

<sup>30</sup> Clasificación que el propio presidente Bush enunciaba en la «National Strategy for Victory in Iraq» que presentó en su discurso en la Academia Naval de Annapolis el 30 de noviembre de 2005.

mismo, no hay que olvidar que, si bien la ocupación iraquí cuesta al Estado y a los ciudadanos estadounidenses 5.600 millones de dólares mensuales, significa también un excelente negocio para la industria armamentística y los diversos *lobbies* vinculados a los neoconservadores en el poder. Por ejemplo, el valor del stock de la compañía Halliburton, vinculada al vicepresidente Dick Cheney, ha aumentado un 138 por 100 desde marzo de 2003 y ha sido premiada con al menos 10 billones de dólares en contratos para operaciones en Iraq<sup>31</sup>. En consecuencia, el futuro sigue anunciando un Iraq pleno de convulsiones, fracturas y discordia.

---

<sup>31</sup> «The Costs of War Factsheet Updated», *Institute for Policy Studies* (26 de octubre de 2005).